

Orden y violencia: la paradoja colombiana

A propósito de la reedición del libro *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*, de la Universidad Eafit*

Por *Fernán E. González***

La feliz iniciativa de Eafit de reeditar la obra clásica de Daniel Pécaut, colega y amigo de tantos años, es un intento de pagar, de alguna manera, nuestras “deudas pendientes” –son palabras de Gonzalo Sánchez– con alguien que ha sido un brillante analista de la realidad colombiana, además de un amigo y colega siempre dispuesto a escucharnos, interrogarnos e invitarnos a escapar de la manera tradicionalmente parroquial como normalmente nos acercamos al análisis de nuestra realidad.

En mi caso, la obligante invitación a escribir estas líneas introductorias me ha llevado a reflexionar sobre el sentido de sus contribuciones a la comprensión de la evolución reciente de la sociedad colombiana, de las cuales nos hemos beneficiado tanto los miembros de la academia colombiana y extranjera como los formadores de opinión pública. Sus aportes, desde su primera obra sobre el sindicalismo hasta sus recientes trabajos sobre las Farc y la violencia, pasando por sus sabrosas crónicas analíticas en torno al acontecer político del país, han posicionado los problemas colombianos en la academia mundial al tiempo que aportado a los colombianos una visión externa de ellos, tanto crítica como

* Pécaut, Daniel, 2012, *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*, Medellín, Eafit.

** Investigador del Cinep.

“simpatizante”, en el sentido etimológico del término. En nuestro caso particular, el del grupo del Cinep que dirijo, “*Violencia y construcción del Estado en Colombia*”, esa “sym patheia” nos llevó a reconocer siempre en él a un interlocutor privilegiado, cuyo diálogo permanente ha permitido enriquecer nuestros puntos de vista.

En la obra de que hoy nos ocupamos, “Orden y violencia”, aparece de manera ostensible esta “simpatía”, este “sentir con nuestros problemas” que se evidencia en su toma de distancia, tanto de la mirada apocalíptica y catastrofista de nuestra vida social y política, como de la visión excesivamente optimista que presenta a nuestro país como la democracia más antigua de Iberoamérica, con una vida política casi exenta de golpes y dictaduras militares, caracterizada por un curso electoral prácticamente ininterrumpido durante dos siglos.

Para este acercamiento concreto a nuestra realidad, Daniel Pécaut escogió un periodo clave de nuestro convulsionado siglo XX: el intento de modernización y fortalecimiento estatal de la llamada “Revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, cuyos antecedentes y consecuencias son analizados magistralmente en relación con la problemática de la creación del orden social, tanto en la Europa posterior a la Revolución francesa como en la América Latina de los inicios del siglo XIX, de las crisis de los regímenes oligárquicos de los años veinte del siglo pasado y del surgimiento de los populismos a partir de los treinta.

El análisis de este periodo es enmarcado por Pécaut en el contexto más amplio de América Latina, donde, según él, el factor social no se percibe como algo susceptible de autorregulación sino como proclive a la desorganización y a la no conclusión: la referencia decimonónica a la “barbarie” reaparece en los años veinte, cuando se resquebrajan los órdenes oligárquicos y surgen los regímenes militares de la primera mitad del siglo XX. Y, de otra manera, aparece de nuevo en la segunda mitad del mismo, cuando los intentos de modernización plantean los temas del dualismo y la marginalidad y los análisis dependentistas enfatizan en las

desarticulaciones internas y externas de nuestras sociedades. En todos esos casos se está pensando en un “exterior” reacio a la socialización, que impide que lo social tenga un principio interno de unidad.

De ahí, sostiene Pécaut, el recurso al Estado en su calidad de conformador de lo social, como aparece en el Estado Novo del Brasil de Getulio Vargas o en el PRI mexicano, lo mismo que la discusión recurrente en torno a la búsqueda ininterrumpida de la construcción de los Estados, visible en las luchas entre poderes centrales y regionales de todos nuestros países. En este marco se producen los intentos de regulación de la sociedad por parte del Estado mediante una legislación social que logra que las organizaciones populares apoyen el intervencionismo estatal, al que consideran como un medio de acceder a la plena ciudadanía. Pero esta intervención estatal no aparece basada en el reconocimiento de las tensiones sociales sino ligada al intento de responder a la desorganización de la sociedad apelando a la complementariedad entre trabajo y capital. En este contexto, el lenguaje de la incorporación e inclusión de las clases populares supone al Estado como unificador de la sociedad.

De estas premisas se desprende, para Pécaut, la centralidad política de las categorías del orden y la violencia: la invocación del orden suple la imposible institución simbólica de lo social y la institucionalización racional de los Estados, particularmente en los casos de México y Brasil, donde se basa en el control corporativista de las organizaciones sindicales. Así, la violencia no es concebida como el reverso del orden sino como “lo exterior inasimilable” de lo social, que debe ser incorporado: los “descamisados” y “marginales” representan la “frontera de la socialización”, los obstáculos a la unidad de lo social. Y la sobrepolitización de estos sectores, que irrumpen en la vida política de América Latina en los años treinta, se asocia a la violencia porque conduce a la fluctuante oposición amigo-enemigo y provoca la desinstitucionalización de los conflictos sociales, que permanecen por fuera del espacio político. Por eso, concluye el autor, orden y violencia se combinan en los hechos y sus representaciones: la política entra en

crisis mientras se desarticula la movilización social, que escapa así al control del Estado.

En contraste con la situación de casi todas las demás naciones de América Latina, Colombia ha mantenido, a lo largo de su historia, una tradición de democracia civil aunque acompañada de una violencia que está presente tanto en las relaciones sociales y políticas como en sus representaciones. Obviamente, reconoce Pécaut, la democracia colombiana está bastante lejana de las exigencias normativas de los textos tradicionales de la ciencia política, como lo muestran el clientelismo, la corrupción y la coacción que caracterizan su vida política. Pero tampoco se reduce a las apariencias formales, como lo evidencian la relativa autonomía de los poderes judicial y legislativo frente al ejecutivo, la libertad de prensa y de las organizaciones sociales y la existencia legal de los partidos, a pesar de sus vicios y de la tendencia a la represión de los grupos de izquierda. Sin embargo, esta democracia limitada está acompañada de una tendencia a la violencia, como aparece en la Violencia de los años cincuenta y en las guerras civiles del siglo XIX.

Frente a esta paradoja, Daniel Pécaut sostiene que la coexistencia entre orden y violencia no es el fruto de una coincidencia sino que ella es consustancial al tipo de democracia existente en Colombia, porque se basa, no en una ciudadanía homogénea sino diferenciada “naturalmente” por redes privadas de dominación social; esta ciudadanía diferenciada no tiende a institucionalizar las relaciones de fuerza de la sociedad sino que hace de ellas el “resorte de su continuidad”.

Sin embargo, Pécaut se muestra reticente frente a la categoría de “orden oligárquico” usada por algunos analistas para referirse a la América Latina de los años treinta, porque ella subestima la autonomía de la esfera política y el poder de los intermediarios políticos, que explican las evidentes pasiones partidistas. Por eso prefiere preguntarse por las razones que tiene la sociedad colombiana para no reconocer al Estado como “agente legítimo de unificación social” y neutralizar el intento de

intervencionismo social del Estado, lo mismo que por las implicaciones de la preeminencia de la sociedad civil en una estructura social heterogénea. Pues en el caso colombiano es evidente que el Estado nunca gozó de preeminencia social ni se apoyó en una ideología de Estado, porque las elites económicas lograron limitar la acción del Estado gracias a las conexiones entre comerciantes, banqueros, industriales antioqueños y cafeteros, que en las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX no necesitaron del apoyo estatal, en contraste con lo ocurrido en otros países del continente. Este contexto económico se reflejó en su ideología liberal, que proclamaba que la sociedad civil nada debía al Estado. Por eso, los partidos políticos nunca se diferenciaban por el contraste entre sus programas económicos y sociales sino solo porque representaban dos estilos de articulación de los diversos grupos populares, basados en adscripciones locales y familiares heredadas desde mediados del siglo XIX y consolidadas por medio de las guerras civiles como especies de subculturas políticas. En ese aspecto cultural, las identidades partidistas terminan articulando diversas sociabilidades, pero las relacionan con dos concepciones incompatibles del orden social: una basada en la relación con la pertenencia a la Iglesia católica, y otra en la voluntad popular.

Sin embargo, a pesar de esas particularidades del caso colombiano, el análisis de este libro de Daniel Pécaut muestra, precisamente, que Colombia no escapa del todo a la perspectiva mundial y latinoamericana del momento, aunque ésta es profundamente transformada por las especificidades propias del país. También Colombia quiere construir orden social y modernidad “desde arriba”, pero sus intentos de intervencionismo social y económico encuentran la oposición de los grupos dominantes, mientras que su propuesta de ampliación de la ciudadanía para crear cohesión social homogénea no logra rebasar los marcos de los partidos tradicionales. Por otra parte –señala el autor–, el hiperconformismo cívico de los sindicatos y del partido comunista, al tiempo que los aísla de la movilización popular, segmenta y desarticula las acciones colectivas. Esta compleja situación, que termina revalorizando a los partidos tradicionales, explica tanto el surgimiento como los límites

del populismo gaitanista, que es visto por las elites como la amenaza de la irrupción de la barbarie. De ahí resultó el desconocimiento de lo social y el acomodamiento del gaitanismo en la división bipartidista, con su renuncia a convocar al conjunto de la nación.

En este contexto, la Violencia aparece como intento de respuesta al problema de la constitución de lo social o, mejor, de la parcial no institucionalización de lo social. Así la Violencia se produce en una democracia basada en una división insuperable en dos subculturas políticas, que la hacen casi imposible de institucionalizar. Por eso, la vida democrática no equilibra la relación amigo-enemigo, ya que las elecciones se consideran como resultado de un equilibrio coyuntural de fuerzas, en las que son frecuentes la apelación al fraude y su denuncia para deslegitimar los resultados. Y las identidades colectivas, al basarse, no en las divisiones sociales sino en la confrontación política entre amigo y enemigo, introducen una ruptura fundamental entre las esferas política y social, que hace que esta última aparezca casi regida por la fuerza.

En resumen, Pécaut sostiene que el compromiso democrático no logra controlar la constitución de un “exterior”, lo cual expresa la falta de cohesión de lo social. Sin embargo, las crisis de los años treinta y la Violencia de los cincuenta no lograron amenazar la hegemonía de las elites, aunque hicieron evidente la falta de plena legitimidad del régimen y las fluctuaciones de las instituciones según la correlación existente entre los grupos sociales. Las luchas agrarias de los años veinte y treinta, el surgimiento de las autodefensas y sus contrincantes en la Violencia de los cincuenta, las luchas obreras de los cuarenta y la intensificación del enfrentamiento bipartidista hasta desembocar en una cuasi guerra civil, no conducen al surgimiento de movimientos sociales sino que se degradan en confrontaciones regionales, locales e individuales, que terminan siendo absorbidas por las redes de los partidos tradicionales.

Este marco conceptual, consignado en la introducción que Daniel Pécaut elaboró en mayo de 1985, permite entender la estructura general del libro,

que constituye una explicación de los cambios ocurridos en el país en los años cuarenta y cincuenta y del fracaso de los intentos de imponer en ese entonces un orden desde arriba. Según el autor, la Violencia expresa precisamente la complementariedad del orden y el desorden en Colombia, debido a la falta de suficiente capacidad del Estado para controlar las tensiones que surgen en la sociedad. Esta situación contrasta con la visión predominante en la literatura sociológica latinoamericana, que tiende a considerar que el Estado, y especialmente el Ejército, monopolizan el empleo de la violencia e imponen su orden sobre la sociedad, a la cual privan de sus expresiones autónomas. En cambio, el caso colombiano puede servir para ilustrar el peligro de volver a la violencia cuando no se atiende a los interrogantes de la sociedad, opinaba entonces Pécaut.

Así, la obra comienza por señalar las frustraciones de la burguesía comercial de Colombia, obligada a transar continuamente con las oligarquías locales y la jerarquía de la Iglesia católica, que obstaculizan la búsqueda de la modernidad. A esto se suman la rigidez de las estructuras agrarias, caracterizadas por una extremada concentración de la propiedad de las tierras cercanas a los centros poblados, y la desarticulación del territorio nacional, debida a la difícil geografía y al escaso desarrollo del mercado interno. Todo eso confluye en un Estado extremadamente débil y un espacio político copado por los partidos políticos pero cuya precariedad deja múltiples intersticios que ofrecen espacio a las maniobras de muchos intermediarios políticos, cuyas redes de poder permiten el control de la población y garantizan su sumisión a los jefes nacionales de los partidos. Esos espacios intersticiales son el escenario de los enfrentamientos políticos, que conservan cierta autonomía frente a las tendencias nacionales de la política en las que se insertan. Esto hace difícil hablar de un sistema oligárquico estable, porque ningún sector nacional es capaz de imponerse del todo sobre el conjunto de las elites regionales, ya que, aunque las luchas políticas entre los partidos y sus facciones logran bastante control sobre la población, estimulan al tiempo las tendencias centrífugas hacia la fragmentación.

En este contexto, basado en una comparación implícita del caso colombiano con los de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, Pécaut enmarca el surgimiento de la burguesía exportadora de café, especialmente en Antioquia y el Viejo Caldas, con cierta base en la producción de la pequeña y mediana propiedad, que logra, por medio de la Federación Nacional de Cafeteros, el pleno control de esa actividad y cierta presencia en la industrialización de las regiones que la acogen, centrada en el abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, esa burguesía cafetera e industrial no se mostraba interesada, según Pécaut, en ejercer el control político sino que permanecía muy reticente frente a la clase política, a la que consideraba que solo se representaba a sí misma y parecía estar llevando la nación al desastre. Esta situación, junto con la precariedad de los recursos fiscales, hacía que el Estado siguiera siendo rudimentario, incluso a pesar de los recursos de la indemnización por Panamá y de los empréstitos extranjeros. En palabras del autor, las clases dominantes no se organizan por conducto del Estado – aunque pueden hacerlo muy parcialmente –, sino mediante el agrupamiento de intereses inmediatos, heterogéneos y hasta yuxtapuestos. A esto se añade el enorme peso de la jerarquía de la Iglesia católica, a la cual se delega la función de ser el fundamento del orden social, con lo cual se acentúa aún más la debilidad estatal.

Esta situación empieza a verse amenazada por la emergencia de la cuestión social, manifestada en la irrupción de un proletariado todavía marginal frente a los artesanos pero que empieza a mostrar su descontento en un incipiente movimiento huelguístico que aparece ligado a la lucha contra los gobiernos conservadores. Surgen así grupos afines al socialismo, que se apoyan también en las luchas campesinas de las zonas de expansión de la frontera agraria y en algunos movimientos indígenas. Ante esa insurgencia de lo social, la respuesta del régimen conservador es predominantemente represiva, pero es claro que empieza a resquebrajarse el poder de los grupos hegemónicos, que se traduce en la división y caída del partido conservador.

En esta coyuntura de crisis se enmarca el proyecto de una república, elitista al mismo tiempo que popular, liderado por Alfonso López Pumarejo, que

es el punto central del libro del que nos ocupamos. Según Pécaut, este intento modernizante reconoce la división de la sociedad en clases sociales para buscar la creación de un nuevo tipo de relación entre Estado y Pueblo que logre la cohesión virtual de la nación por conducto del poder estatal. Sin embargo, no se trata del mito del encuentro entre burguesía nacional y clases populares, pues no se pretende anular el orden oligárquico sino yuxtaponer a él un simbolismo nacional, que no conjura sino incrementa las desarticulaciones sociales del régimen existente.

El caso colombiano contrasta con la evolución general de otros países latinoamericanos, como Argentina y Brasil, donde se subraya el apoyo estatal a la industrialización por sustitución de importaciones y cierto dominio estatal sobre la sociedad, a pesar de sus crisis recurrentes y sus escisiones internas. En esos países el Estado aparece como un intermediario entre “el interior” y “el exterior”, que a su vez expresan la fragmentación y el lugar virtual de la cohesión. Esta escisión es producto de lógicas divergentes: una representa al Estado como el lugar del compromiso y la negociación entre los intereses dominantes, que centraliza la dominación sobre las clases populares, pero otra concibe la intervención estatal como agente de la organización de nuevos sectores sociales.

De esa manera el Estado se convierte en el escenario de los juegos de influencias entre los sectores que compiten por el reparto y la destinación de los beneficios provenientes de las exportaciones; en esa competencia, y para legitimar sus demandas, los grupos opuestos se ven obligados a apelar a un “público” compuesto por los consumidores y los trabajadores. Pero la incapacidad de la clase dirigente para asumir la dirección del proceso económico la lleva a presionar al Estado para que intervenga también en el campo de la producción. Para esa intromisión, el Estado busca el apoyo de quienes han estado tradicionalmente marginados de la ciudadanía: el Pueblo se convierte así en el correlato de la intervención del Estado en favor de la industrialización y la modernización; de ahí la importancia de la legislación social, tanto para convocar simbólicamente al pueblo como para ejercer el control sobre él.

Las implicaciones de estos planteamientos son muy importantes en el análisis de Pécaut, porque evidencian que el Estado no logra necesariamente el predominio sobre la sociedad, ya que su papel de unificación y arbitraje se encuentra restringido, tanto por la multiplicidad de intereses de los grupos de presión como por la falta de coherencia interna entre las esferas –complementarias pero relativamente independientes– de su actividad. Esta situación explica la apelación al discurso político de la metáfora organicista por parte tanto de los gobiernos autoritarios como de los movimientos populistas: para legitimar su acción, los primeros acuden a la unidad de la Nación y los segundos al Pueblo.

Este marco comparativo con países como los del Cono Sur introduce el análisis de la especificidad del proyecto político de López Pumarejo como una “ruptura en la continuidad”, basada en cierto relevo progresivo de la clase dirigente, un cierto acercamiento entre las formaciones moderadas de los dos partidos tradicionales y una apelación a los supuestos sectores medios, nada significativos entonces, al lado de cierta suspicacia frente a los militares, cuya presencia en la vida pública era tradicionalmente muy discreta. Pero el hecho de que la burguesía cafetera no requiriera el apoyo estatal y de que insistiese en mantener la confianza de los Estados Unidos, favorecía la adhesión al liberalismo económico y la consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros, con gran control de los productores. La autonomía de la Federación frente al gobierno de López, que le permitía operar como “un Estado dentro del Estado”, consigue frenar los intentos de hacer de los recursos cafeteros el puntal de una política más intervencionista en materia económica. Este intento, inspirado en los logros de las políticas del Brasil, es neutralizado por los cafeteros con la complicidad de la incipiente industria y del sector bancario.

Al lado de este modelo de desarrollo liberal el proyecto lopista convoca a los sectores populares urbanos, más vinculados al artesanado que al proletariado, en un momento de expansión de la urbanización y de crisis de las obras públicas. La debilidad del partido comunista, la ambigüedad del gaitanismo frente al liberalismo y el crecimiento de las organizaciones

sindicales explican la adhesión creciente de las masas urbanas a la “república liberal” de López Pumarejo. El manejo gubernamental de las huelgas y el apoyo oficial al sindicalismo, junto con el respaldo de los comunistas y gaitanistas, se traducen en el acercamiento de las masas populares al Estado durante la llamada “Revolución en marcha”.

Sin embargo, el escaso margen de maniobra del Estado frente a las oligarquías tradicionales, que se estaban reorganizando, la fragilidad de las masas populares y la debilidad del aparato comunista hacían que el proyecto lopista estuviera muy lejos de la idea de “frente popular” de Chile y asimismo de cualquier apelación populista. Según Pécaut, es precisamente la fragilidad de las organizaciones populares el factor que las lleva a depositar sus expectativas, un tanto exageradas, en el reformismo progresista de López frente al peso dominante de los sectores tradicionales. Por eso, la organización sindical de la CTC termina poniendo la adhesión popular, no al servicio del Estado sino del partido liberal en el poder, a pesar de que éste seguía siendo una modalidad de la dominación oligárquica. Sin embargo, la supuesta alianza entre las masas populares y la llamada burguesía progresista en contra de la “reacción” no logra neutralizar el esfuerzo conjunto de la burguesía industrial y los latifundistas para bloquear la implantación de leyes sociales como las de salario mínimo y obligatoriedad de las cesantías.

Por esa razón los intereses partidistas terminan por imponerse sobre los sociales: las elites liberales miran el acceso al poder como el tránsito hacia la modernidad y la secularización política, pero eso termina reactivando el fundamentalismo de amplias franjas de la Iglesia y del partido conservador. La reforma constitucional de 1936, que prescindía del reconocimiento eclesiástico como elemento esencial del orden, es interpretada como parte de un complot ateo contra el sentimiento católico de la nación. Sin embargo, Pécaut sugiere que el surgimiento de los sectores más derechistas, casi facistizantes, en regiones como Antioquia, Valle del Cauca y Caldas, económicamente muy importantes pero políticamente marginales, puede estar asociado a una reacción de las elites locales a la mayor consolidación

del Estado central. Además, recuerda la importancia del catolicismo en la subcultura identitaria del partido conservador, que asocia el orden social y político con el origen religioso de la autoridad.

En este marco, el autor destaca el pensamiento fundamentalista de Laureano Gómez, cuya interpretación complotista de la historia como combate entre el orden y el caos lo lleva a mantener una mirada pesimista de la sociedad, que considera al borde del cataclismo social. Su desconfianza frente al fascismo italiano y el nazismo, su cercanía al franquismo español, que hablaba de regreso a la cristiandad y al hispanismo, su simpatía por el corporativismo portugués, junto con su lenguaje virulento, logran un gran ascendiente sobre las masas y el bajo clero rural del oriente del país, al lado de la desconfianza de las elites económicas de Antioquia, los sectores moderados de la Iglesia y los dirigentes más urbanos del conservatismo. Para Pécaut, Laureano sitúa la política en el terreno de lo no negociable, al tiempo que rechaza el recurso a la soberanía popular como origen de la autoridad política; por otra parte, instaura una segmentación tan radical de la sociedad, que naturaliza la división histórica entre conservadores y liberales. Esta partición de aguas entre malas y buenas impide toda suerte de compromiso y negociación e inscribe el acto político bajo el signo de la violencia. La inscripción directa de la división política en la sociedad impide así toda búsqueda de otra institución política de lo social y liga al Estado y a la ciudadanía a la lucha por la hegemonía de uno u otro partido.

La oposición al proyecto lopista, tanto del fundamentalismo conservador como de los gremios económicos y los sectores mayoritarios del propio partido liberal, condujo al gobierno moderado de Eduardo Santos, seguido por un segundo mandato del propio López Pumarejo. Curiosamente, la caída de la demanda mundial del café provoca intervenciones gubernamentales como la creación del Fondo Nacional del Café, administrado por la Federación, que termina abandonando sus reticencias frente al Estado. Pero la sujeción de la administración

estatal a la lógica partidista y a los dirigentes de los gremios económicos no permite superar la tradicional precariedad del Estado. Así – sostiene Pécaut–, el aumento de la regulación estatal es aprovechado por los intereses privados para instaurar una especie de cogobierno de los gremios, cercano a un corporativismo “societal” y “liberal”, donde el modelo liberal de desarrollo se articula con la necesaria regulación del Estado. El resultado de esta combinación es el paso, de un intento de articulación de los intereses privados mediante la acción del Estado, a la desarticulación del Estado en beneficio de los intereses privados.

Ante estas transformaciones, los aparatos sindicales y el partido comunista no solo no asumen, como cabría esperarse, la expresión del inconformismo popular sino que se aíslan de la creciente movilización social de esos años y adoptan una actitud “hiperconformista” con respecto a los gobiernos liberales. Ello conduce al creciente descrédito del gobierno y a la crisis política, que desembocan en un difuso malestar social, presentado por Jorge Eliécer Gaitán como el divorcio entre el país “político” y el país “real” –que irrumpe en la escena bajo la forma de “masas peligrosas”–. El escenario político se ve oscurecido por la evolución de los gobiernos liberales, el conformismo de los sindicatos y de la izquierda y el endurecimiento del sector laureanista del conservatismo con el apoyo de sectores del bajo clero. Este enrarecimiento es evidente en las críticas de otros sectores tradicionales del conservatismo. El combate de Gómez contra el liberalismo y sus aliados comunistas, muy personalizado en el presidente López, reactiva la naturalización de la división de los colombianos en los dos partidos tradicionales. La oposición amigo-enemigo de Schmitt se convierte en la esencia de la política, que hace imposible la negociación y el compromiso, propios de la política moderna.

En este confuso escenario político, la creciente miseria de las masas rurales y su progresivo desplazamiento a las ciudades, en las condiciones de una industria incapaz de absorber el consiguiente aumento de la población, hacen evidente la emergencia del problema social. Frente a él, el sistema político se muestra incapaz: el fracaso del proyecto de López priva al

Estado de ser el punto de referencia de la unidad social, mientras que el laureanismo naturaliza la división social al situarla en el campo político y el populismo gaitanista la sitúa en la oposición entre pueblo y oligarquía.

Pécaut contrasta este surgimiento del populismo gaitanista con los análisis teóricos de otros casos latinoamericanos, como el Apra de Haya de la Torre, el getulismo brasileño y el peronismo argentino. Como afirmación fundadora del gaitanismo, señala la imposibilidad de una relación social en Colombia, pues tanto el pueblo como la oligarquía se plantean como exteriores a lo social: la desnutrición, la ignorancia, la enfermedad y el alcoholismo tornan al Pueblo políticamente incapaz, mientras que el poder omnipotente de la oligarquía separa sus intereses de los del resto de la sociedad, a la que controla pero de la que es ajeno. La confrontación arcaica y mítica entre un pueblo despojado de atributos y un país político que controla todas las representaciones y espacios, remite a un espacio definido por los enfrentamientos de fuerzas, que necesita la regulación estatal para buscar el equilibrio entre los intereses económicos contrapuestos.

Esta representación política, afirma Pécaut, señala una ruptura explícita de Gaitán con la democracia liberal “clásica”, a la cual reprocha su individualismo, su menosprecio de la unidad orgánica de la sociedad y la separación que introduce en la sociedad. Por eso, las masas solo pueden acceder a lo político por el camino de su identificación con un líder carismático que asimila la energía del Pueblo. Por eso mismo el gaitanismo no logra una sólida organización de cuadros de partido, aunque termina superando a los notables y los gamonales del partido liberal y a los dirigentes sindicales de la CTC y del partido comunista, mientras logra un gran apoyo electoral entre las masas urbanas, con excepción de las poblaciones de Antioquia y el Viejo Caldas. Sin embargo, el peso del inconsciente partidista hace que la movilización gaitanista termine adscrita, aunque de manera ambigua, a la división partidista tradicional. Su ambigüedad es aún mayor frente al movimiento sindical. Este regreso a las referencias identitarias de los

partidos hace de lo no social el sustrato de lo político: en esto coinciden tanto el fundamentalismo del conservatismo laureanista como el populismo gaitanista; la referencia conservadora a la trascendencia sobrenatural como base de su identidad política, así como la del gaitanismo al despertar colectivo del Pueblo, rechazan lo político como tal y tratan de constituirlo a partir del exterior de lo social.

Esta situación se proyecta en el escenario electoral, marcado siempre por los alegatos de fraude, enderezados a deslegitimar los resultados desfavorables, y en la repartición de la burocracia, que convierten al Estado en campo de batalla. Los intentos violentos de conservatización y las movilizaciones liberales de protesta contra la violencia oficial desembocan en el asesinato de Gaitán y la espontánea reacción popular del “bogotazo” y otros levantamientos en varias ciudades, que sorprenden tanto a las clases dominantes como a los líderes populares, quienes observan de qué manera “el exterior de lo social” irrumpe en la vida colombiana. Así, según Pécaut, la ruptura de lo político, producida por el fundamentalismo y el populismo, abre el camino a la Violencia.

Por eso mismo su libro culmina con algunas consideraciones sobre la Violencia: el fracaso de los intentos de conciliación nacional después del bogotazo condujo a la generalización de los hechos violentos y a la profundización de la división entre identidades contrapuestas, con el telón de fondo de la fragmentación radical de la sociedad y de la ilusión de continuidad con las luchas del pasado. Para Pécaut, la Violencia se sustrae a los intentos de explicación causal e instrumental y hace inadecuadas las interpretaciones socioeconómicas, ya que sus conflictos no giran en torno a un eje central ni muestran límites claros entre lo social y lo político. Muchos enfatizan las evidentes continuidades con el pasado: la voluntad de preservar o restablecer un orden, mezclada con estrategias ofensivas y defensivas, culmina mostrando la tradicional precariedad del Estado. Esto conduce a un lenguaje de la eterna repetición y del regreso al orden oligárquico momentáneamente interrumpido, al tiempo que priva a las masas

populares de un apoyo, real o ficticio, para acceder a la ciudadanía política. Otros subrayan el carácter irreductiblemente heterogéneo de las violencias, el precedente proceso de desorganización de los actores sociales colectivos y el evidente predominio de los gremios económicos.

Pero, según Pécaut, la explicación de la Violencia es esencialmente política: al presentarse la tradicional división partidista asociada a la conciencia de la división radical de la sociedad, el acto político llega a ser concebido como violencia. La negativa a reconocer la legitimidad del sufragio, proclamada por ambos partidos, hace concebir lo político como pura correlación de fuerzas. La autonomización de la división política con respecto a la división social carga a los símbolos tradicionales de los partidos con nuevos significados: el partido conservador en el poder redefine la tradicional división con la denuncia de la presencia comunista, pero recurre a sus fuentes doctrinales para establecer una división absoluta entre amigos y enemigos, que encuentra sus raíces en lo sagrado.

Hasta aquí mi lectura de las ideas centrales del libro de Daniel Pécaut, centrado en torno a la paradoja colombiana de un Orden que coexiste con la Violencia y está íntimamente relacionado con la división absoluta entre amigos y enemigos provocada por las adscripciones partidistas en un momento marcado por la presencia del fundamentalismo conservador y el populismo gaitanista en la vida de la nación. La conclusión de mi lectura apunta a señalar un nuevo desafío a la reflexión del autor: ¿es posible establecer hoy una comparación del análisis de la Violencia de la primera mitad del siglo XX con la de la segunda mitad del siglo y los albores del XXI, que sintetice los diversos estudios fragmentarios del autor en una visión de conjunto? Es obvio que hoy ha desaparecido la referencia a la división maniquea de esos años, que el contexto social y político es completamente distinto y que los recursos del narcotráfico han introducido transformaciones sustanciales en la lucha armada. Esto plantea el interrogante de cómo y por qué sigue coexistiendo hoy el Orden y la Violencia.